

ESTADO, ACUMULACION Y CRISIS DEL CAPITALISMO ECUATORIANO

*Iván Fernández Espinoza**

1. *Algunas precisiones teórico-metodológicas.*

El tema de Estado y Acumulación ha llevado a un error teórico en el que generalmente se incurre: considerar el proceso de acumulación de capital y el fenómeno estatal como dos procesos diferentes, separados; como dos instancias en donde el Estado supuestamente actúa, "interviene" desde fuera en el proceso de acumulación. Como si el Estado fuera algo exterior a la producción capitalista.

Para evitar este error teórico que generalmente lleva a visiones distorsionadas de la realidad, hemos de procurar partir de un enfoque totalizador, es decir entender al Estado a partir del capital, pero no como elemento externo, sino *como parte constitutiva del capital.*

Qué quiere decir esto de entender al Estado como parte constitutiva del capital:

En primer lugar que el capital es, ante todo, una relación social.

*/ Master en Sociología, profesor Principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador.

Segundo, que esa relación social capitalista es una relación de explotación, es decir que lleva implícita la imposición de producir plusvalor, base misma del proceso de acumulación, y ésta, fin último del capitalismo.

Tercero, que dicha relación social de producción, implica *simultáneamente* una relación de *dominación*, de subordinación del trabajo al capital.

Y, en cuarto lugar, en la medida que se trata de una relación social de explotación y dominación, esta debe ser legitimada, legalizada jurídicamente, "fetichizada", como si se tratara de una relación entre individuos iguales, y *esta función, de mantener la explotación y legitimar la dominación que posibilitan la acumulación y reproducción ampliada del capital, la cumple el Estado.*

Por lo tanto el *Estado capitalista es resultado y condición de existencia de la producción y acumulación capitalista*, es el elemento constitutivo de la relación capitalista y del proceso de acumulación.

Que el Estado *aparezca* separado de la sociedad, por encima de las clases, o separado de "la economía", es precisamente *una apariencia*, pues, *en esencia*, el Estado está en la mercancía misma, es el "cómplice" principal de la relación social de producción (entiéndase de explotación y dominación).

Por eso, aquellos "análisis" que hablan de un Estado "intervencionista" anterior y de un Estado "pasivo" hoy, no son sino falacias interesadas o enfoques erróneos como señalamos al inicio.

Lo cierto es que el Estado siempre está presente en la acumulación capitalista, tiene un "pecado original": nace asociado al capital, nace y se desarrolla con el capital.

Pero también es verdad que las *formas* de la acción estatal son dife-

rentes es decir que el Estado aparece jugando un rol o cumpliendo *determinadas funciones; de una manera, en ciertos períodos históricos, y de forma diferente en otros momentos.*

Esto tiene una doble razón de ser: primero que al capital no solo hay que entenderlo como una *relación social* (con las características antes anotadas), sino también como *proceso histórico*, es decir, como proceso social que implica *desarrollo, transformaciones, sucesión de etapas*, que van desde la acumulación originaria al imperia- lismo, de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, y a cada una de *esas etapas del desarrollo del capital le corresponden igualmente formas diferentes de acción estatal.* En segundo lugar, un aspecto inseparable del fenómeno estatal es saber quién ejerce el poder y esto hace referencia a la lucha de clases, a las contradicciones de clase, a pactos de dominación, a la *hegemonía política, en cada situación concreta.* En la medida en que comprendamos quien tiene la hege- monía política en el poder del Estado, quien o qué clase o qué frac- ción de clase comanda, dirige el proceso social, nos explicaremos mejor los cambios en la forma de la actividad estatal de las socieda- des capitalistas.

En síntesis:

- a) El Estado es elemento constitutivo del capital, entendido este como relación social.
- b) Estado y acumulación son mutuamente condicionantes, desde su origen.
- c) Se pueden diferenciar formas distintas de la acción estatal, a partir del grado de desarrollo histórico que haya alcanzado el capitalismo y qué clases sociales o fracciones de clase tienen la hegemonía política en cada situación concreta.

2. Ahora bien, el tema sobre Estado y acumulación que nos preo-

cupa, está referido, desde luego, al caso del capitalismo ecuatoriano actual. No se trata, por lo tanto, de un momento de estabilidad o auge del ciclo de la acumulación, sino, por el contrario, se trata de un período histórico de *crisis en el proceso de la ACUMULACION* de capital.

Por tanto, la relación Estado-acumulación tiene que ser entendida, analizada e investigada en el contexto de la *crisis* por la que atraviesa el capitalismo ecuatoriano en el momento actual, y más particularmente a partir de 1981.

Entenderemos por *CRISIS DE ACUMULACION*, la interrupción de uno o más momentos del proceso de la producción (entendido como producción-circulación-distribución y consumo), que afecta el ciclo D—M—D'. La posibilidad de la crisis se encuentra en el capital mismo.

Es decir, en la "metamorfosis" del capital se encuentra la posibilidad de la crisis, por la separación de los procesos en el tiempo y en el espacio, particularmente entre la compra y la venta de mercancías. Pero para que dicha *posibilidad* se vuelva *crisis real* es necesario que las contradicciones del capital se expresen en cada sociedad concreta.

O, en otros términos, los principios generales de la *teoría de las crisis*, tienen infinitas formas de manifestarse en cada caso concreto, y ello dependerá de las contradicciones específicas que se desarrollen en cada Formación Económico-Social.

En el caso concreto que nos preocupa, la época de modernización y crecimiento económico que vivió el capitalismo ecuatoriano comienza a mostrar sus primeros síntomas de agotamiento a fines de los años 70 e inicios de los 80. El "crak" más violento de la economía ecuatoriana se produce entre 1982 y 1983 en que la mayoría de los indicadores de las cuentas nacionales muestran signos negativos y el PIB decrece al -2.80/o.

En la crisis económica se vive la combinación de una serie de contradicciones tanto de orden interno como externo, pero, desde el punto de vista del diagnóstico de la sociedad, la crisis permite descubrir claramente las contradicciones inmanentes a la producción y dominación capitalistas las que se manifiestan en su estado más agudo, develándose en toda su magnitud.

Precisamente, la crisis que vive la sociedad ecuatoriana desde 1981 hasta la actualidad, ha demostrado, al menos, dos ámbitos de contradicciones: por un lado una cada vez mayor subordinación de nuestra economía al capital monopólico internacional que se expresa en las vulnerabilidades y desequilibrios del aparato productivo nacional y en su extrema dependencia del mercado internacional, y, por otro lado, un reacomodo de la correlación de fuerzas sociales por el control del poder del Estado para imponer su hegemonía, o más precisamente, un desplazamiento de la hegemonía política y un cambio en el rol del Estado en función del nuevo bloque en el poder.

En la primera contradicción (la subordinación al capital transnacional) encontramos la causa principal de la crisis que vive actualmente el capitalismo ecuatoriano. Producto del acentuado proceso de internacionalización que actualmente vive el capitalismo, nuestra economía ha terminado total y estructuralmente subordinada a su lógica de acumulación y, de hecho, la crisis económica internacional está impactando de manera directa en la economía dependiente, desencadenando una profunda crisis en nuestra sociedad, que, desde luego, rebasa el ámbito puramente económico y se transforma en crisis social, política y hasta moral.

El mecanismo desencadenante será la deuda externa, que ha rebasado los límites de tolerancia y se ha tornado impagable. A partir de este hecho, el capital financiero internacional ha creado y recreado mecanismos de succión que nos han tornado en exportadores de capital. A las transferencias netas de capital-dinero hacia los centros

financieros, agréguese la transferencia de excedente que perdemos en el intercambio comercial desigual en el mercado internacional, la repatriación de utilidades, la fuga de capitales, etc.

Los resultados ya son conocidos: desequilibrio en la balanza de pagos, caída de la reserva monetaria internacional, déficit fiscal creciente, desorden monetario, devaluaciones, inflación, desaceleración de las tasas de crecimiento y deterioro de las condiciones generales de vida de los trabajadores por la caída de sus ingresos reales, creciente desempleo y subempleo y condiciones de explotación más intensas.

En este contexto de crisis y con las manifestaciones más visibles antes anotadas, era evidente que en el escenario político se iba a desatar una lucha por el control del Estado por tres causas fundamentales: a) porque el Estado, con todo y la crisis, continúa disponiendo de un excedente importante, tanto tributario como proveniente de las exportaciones petroleras, y, por ende, sigue siendo el eje básico de la realización y articulación del proceso de acumulación de capital; b) porque controlando el Estado, y especialmente su aparato económico, es posible llevar a efecto las negociaciones con el capital financiero internacional y sacar la mejor tajada de la crisis trasladando sus costos al resto de la sociedad; y, c) porque controlando el poder del Estado es posible ejecutar una determinada política económica como estrategia de resolución de la crisis, pues esta afecta en diverso grado a las distintas fracciones del capital y, como es sabido, no hay una política económica neutra, sino más bien en ella se expresa la hegemonía política.

Dos tendencias para enfrentar la crisis se dieron en el debate político-ideológico de los últimos años. El proceso electoral de 1984 clarificó la nueva correlación de fuerzas y el triunfo de una de ellas.

La experiencia latinoamericana nos muestra que la mayoría de países de la región se han movido alternativamente entre una estrategia

o modelo reformista-desarrollista, o un modelo estabilizador-liberalizante. En los casos en que se han combinado acciones de los modelos mencionados, siempre es posible determinar cual de ellos es el que predomina.

Para el modelo desarrollista, la resolución de los problemas económicos y sociales debe sustentarse en dos acciones simultáneas: el crecimiento o expansión de ciertas variables como el PIB, el ahorro, el gasto público, las exportaciones e inversiones y una serie de reformas modernizantes en lo agrario, tributario, fiscal y administrativo. En el marco de esta estrategia se reconoce que el mercado presenta una serie de distorsiones en la asignación de los recursos, en los flujos de capital y de mercancías, en la competencia misma, en la demanda, etc. y que, una de sus manifestaciones es la tendencia a formar unidades oligopólicas y oligopsónicas que acentúan los desequilibrios anotados. En esta alternativa reformista se reconoce, entonces, al Estado un papel protagónico, un rol activo, intervencionista en el mercado con el objeto de lograr los fines propuestos.

Para el modelo estabilizador-neoliberal, como ya es conocido, la clave del desarrollo económico de la sociedad y por ende de la prosperidad de los individuos, se encuentra en el mercado, en el libre juego de sus fuerzas, de la oferta y la demanda, de precios y salarios, de capitales y bienes. Por lo tanto, el mercado debe funcionar a partir de su propia lógica, de su propia dinámica, y, en esa libre competencia lograr el equilibrio económico; toda interferencia al libre juego de las fuerzas del mercado distorsiona la actividad económica, más aún si estas interferencias provienen del Estado. Es decir, para la estrategia neoliberal, el Estado no puede ser intervencionista en las reglas del mercado, su acción debe ser meramente reguladora, arbitral, y sobre todo, garantizar el equilibrio social, el orden establecido.

Precisamente, en el caso ecuatoriano, a partir de que la crisis comienza a manifestarse en un descenso paulatino de las tasas de crecimiento, la estrategia de desarrollo capitalista inicia un desplaza-

miento de sus tesis de reforma (Gobierno de Roldós) hacia una posición en que se combinan políticas económicas de los recetarios desarrollista y neoliberal simultáneamente (Gobierno de O. Hurtado), hasta la progresiva imposición del modelo neoliberal (Gobierno de L.F. Cordero) que alcanza su culminación o su grado más avanzado con el "paquete" de medidas que se tomaron el 11 de agosto de 1986.

En efecto, iniciada la crisis, a partir de Mayo de 1981 (Gobierno de O. Hurtado) se comienza también el diseño de una "política de ajuste gradual y sostenido" tendiente a corregir los desequilibrios del déficit externo, del déficit fiscal, los desajustes del aparato productivo, del desarrollo social y de renegociación de la deuda externa frente a la banca privada internacional y al FMI.

La política selectiva de importaciones, las "minidevaluaciones", la reasignación de recursos, las reformas a la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Control del Gasto Público, la creación del Fondo de capitalización de Empresas y el fortalecimiento de la propiedad comunal y estatal, constituyeron quizá las acciones fundamentales, y especialmente las dos últimas que quedaron a nivel de proyecto, que desataron la furia empresarial que reaccionó violentamente ante dicha estrategia "comunista", como la calificaron.

El discurso político se movió en los ámbitos del "interés nacional", de la necesidad de una "economía de guerra", del interés social sobre los criterios privados, etc., mas todo fue en vano, pues, las clases o fracciones monopólicas oligárquicas sentían afectados parcialmente sus intereses, pues ellos querían ser los beneficiarios de la crisis y no quienes tengan que "compartir los costos" de la misma.

La estrategia del centro modernizante, por la propia debilidad de sus fuerzas sociales, no tenía otra alternativa que usar al Estado como el agente activo del "ajuste". y, en efecto, aprovechando de la importante estructura institucional del Estado, de su autonomía re-

lativa, y de los niveles de intervencionismo que había alcanzado, se hizo uso de dicho poder contra las "astucias" de la derecha política que se expresaba a través de las Cámaras de la Producción y de toda cuanta "asociación de empresarios" existía.

Al parecer, más valieron las astucias de la derecha política, quienes desataron una campaña contra el sector público, contra el estatismo, el "comunitarismo" de la Democracia Popular que era un "comunismo solapado", y, blandiendo los principios sagrados de la "libertad de empresa", de la capacidad emprendedora del sector privado, ellos se proclamaron los únicos con capacidad para enfrentar la crisis a partir de una "buena" conducción del Estado.

El hecho es que la actitud de los "empresarios" ya expresaba los inicios de la nueva correlación de fuerzas, comandada por la oligarquía agroexportadora y financiera, a la cola de la cual se puso la fracción industrial monopólica, aliada al capital transnacional, y el resto de fracciones de alto poder.

Poco a poco el proyecto reformista cedió posiciones, se dió mayor facilidad de acción al capital financiero, se "sucretizó" la deuda externa privada y el presidente Hurtado se declaró el más antiestatista del Ecuador.*

La arremetida oligárquica contra el "sector público" dio resultados

*/ *"De estatismos hablan solo ciertos sectores empresariales y si en el país hay temor, ellos son los responsables, porque ellos cubren las páginas de los periódicos diciendo que viene el estatismo. El gobierno no es responsable porque no ha tomado ni tomará medida alguna para estatificar la producción en el Ecuador. . . No queremos quitar ni una pulgada de terreno al pueblo ecuatoriano, no queremos hacer que el pueblo tenga otro patrón más despótico que sería ese patrón dominado Estado". Discurso pronunciado por el Presidente O. Hurtado el 17 de septiembre de 1981 en Milagro. Citado por NICK, Mills; en Crisis Conflicto y Consenso. Corporación Editora Nacional, 1984. p. 119.*

efectivos, pues, de pronto se encontró que el Estado, su "intervencionismo" y la mala conducción del mismo, era el culpable de la crisis, del endeudamiento externo y de la inseguridad del capital privado para invertir. Más aún, toda estrategia de desarrollo que le asignara al Estado un rol protagónico en la economía era tildado de "socializante".

En el contexto de esta lucha político-ideológica se realiza el proceso electoral de 1984 y, en la segunda vuelta electoral para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, se enfrentan las dos tendencias políticas en que se agruparon las fuerzas sociales del país; la tendencia centrista-reformista representada por la alianza Izquierda Democrática-P.C.D., a las que se sumarían otras del centro político, y, la tendencia derechista-oligárquica agrupada en el Frente de Reconstrucción Nacional, compuesto por las organizaciones políticas más conservadoras y apoyados por todas las Cámaras de la Producción.

El triunfo del Frente de Reconstrucción Nacional (por una diferencia de alrededor de 85.000 votos), significó el ascenso al poder del Estado de una alianza de las distintas fracciones del capital, comandadas por la burguesía oligárquica agro-exportadora y financiera de la costa. Algunos sectores de la burguesía industrial-financiera de la sierra que se identificaron con el centro-izquierda, quedaron excluidos del poder.

Definida así la alianza política y una vez asentados en el poder del Estado, había que consolidar la hegemonía e iniciar la nueva estrategia propuesta, calificada por todos como Neoliberal.

El ropaje populista con que se vistió el discurso político de la derecha pronto se develó y, a los pocos meses se inició la escalada en beneficio de los sectores privados, a los que se subordinará el Estado.

El escaso nivel de organización social, la debilidad del sistema polí-

tico que no maduró lo suficiente en la fase de modernización y la dispersión de las fuerzas políticas del centro, facilitaron el camino y en los dos primeros años del gobierno "neoliberal" se consolidó el nuevo modelo de dominación y de acumulación.

La "nueva política" consistió fundamentalmente en la aplicación de una política económica sustentada en esquemas neoclásicos, poniendo énfasis en el corto plazo y bajo el paradigma de la "magia del mercado"; en esta estrategia el rol del Estado cambiará cualitativamente en sus relaciones con la sociedad civil.

La estrategia de resolución de la crisis consistió básicamente en ejecutar un plan de ajuste tipo "shok". Se trató de corregir los desequilibrios económicos a partir de una política monetaria y fiscal ortodoxa, adaptándose a los programas de estabilización propuestos por el FMI, liberalizando la economía (precios de sustentación, flotación del tipo de cambio y tasas de interés) y vinculándonos al mercado mundial bajo el principio de las ventajas comparativas.

La renegociación de la deuda externa con el apoyo de la administración Reagan y garantías atractivas al capital extranjero, constituían el eje de la subordinación al capitalismo central.

El "gobierno de los empresarios", como se llamó, creó extraordinarias condiciones de seguridad y ventajas para sus inversiones y, para ello, desplegó una sutil política de utilización del Estado, de aquel Estado que en el período anterior les había creado tanta "inseguridad" para sus intereses.

La estrategia consistió en lo siguiente: dado que había que actuar en un contexto de crisis económica, las funciones estatales que se privilegian son las funciones de acumulación, y más específicamente la POLÍTICA ECONOMICA; en este ámbito había que imponer la hegemonía y para ello se utilizó principalmente el aparato

técnico-administrativo del Estado. Es decir, se planteaba la tesis de “no al intervencionismo estatal”, que afectaba sus intereses y, “sí al intervencionismo estatal”, pero que protegía sus intereses, y este era aquel que se desplegaba desde el aparato técnico-económico del Estado, en donde ponen a sus mejores hombres y desde el cual utilizarán al Estado con la eficiencia propia de “hombres de empresa”, no importa si los medios son legales o corruptos, lo importante son los fines.

A partir del control del “corazón” del Estado (entiéndase: Junta Monetaria, Banco Central, organismos financieros públicos, Ministerios de Finanzas, Agricultura, Industrias e Hidrocarburos), se desarrolla un juego tridimensional. Este consistió en, por un lado, neutralizar y minimizar al máximo las otras funciones del Estado que podían intervenir en el ámbito de la sociedad civil o del MERCADO, así como a todas aquellas instituciones asistencialistas o de paternalismo estatal-social, a las cuales solo se recurrirá en la medida que apoyen la legitimización de su política económica. Por otro lado, dado que su acción política se la realiza a partir de un “gobierno fuerte”, que si tiene autoridad (“que tiene los pantalones bien puestos” dirá permanentemente el Presidente Febres Cordero), y por los propios conflictos sociales que desata la “nueva política económica”, había que fortalecer y privilegiar los aparatos represivos del Estado (básicamente el Ejército, como rama de las FF.AA. y la Policía Civil).

En tercer lugar, para la acción legitimadora de su estrategia, había que pensar en un mecanismo que, sin pasar por el Estado burocrático-tradicional anterior, ni por los Gobiernos Seccionales, la mayoría de los cuales estaban en manos de la oposición (Municipios y Consejos Provinciales), permita actuar de manera rápida y eficiente pensando tanto en el corto plazo como en el mediano plazo (elecciones de 1988), y para ello se crean las UNIDADES EJECUTORAS, es decir, un mini-Estado ejecutivo al servicio del poder dominante.

En este sentido asistimos a un proceso de dispersión estatal, en el que se privilegia la esfera técnico-represiva del Estado, se crean instituciones paralelas y se desmembra instituciones para darles administración regional (Subsecretarías del Litoral), y, simultáneamente, se deprime o arrincona a aquellas instancias estatales que deben cumplir funciones meramente reguladoras, impidiendo cualquier intento de expansión.

Como se ha planteado que se trata de un proyecto de largo plazo, el paso siguiente debe ser cortar burocracia, especialmente de aquellas áreas que se consideran improductivas, de servicios innecesarios, o excesivas para la administración de un Estado eficiente. Más, este aspecto se lo dejó de lado por considerar que la coyuntura política no era la más adecuada y porque el régimen de la "reconstrucción" llegaba ya a su término.

En cuanto a la privatización de las empresas públicas, este es un programa que depende de la capacidad de inversión de los grupos económicos nacionales y de la rentabilidad que les ofrezca dicha inversión. Las empresas donde el Estado tenía participación accionaria y que resultaban atractivas al capital nacional ya fueron ofertadas por la Corporación Financiera Nacional al capital privado y, de alrededor de 17 paquetes accionarios, no pasaron de uno o dos los casos que se negociaron, pues, las actividades especulativas resultaban mucho más rentables que las inversiones productivas. En otros casos, como en las actividades petroleras, más bien se optó por dar mayores facilidades y seguridades al capital transnacional para que compita con la empresa estatal CEPE.

En conclusión, el proceso que ha vivido el país en la presente década constituye un "retroceso" en lo económico, en lo político y en lo social, o son más bien las tendencias lógicas de un estilo de desarrollo que, como ya se ha visto en la mayoría de los países latinoamericanos, conduce necesariamente a una subordinación cada vez más estrecha de la esfera política a las tendencias de la acumulación,

quedando en un mínimo imperceptible la autonomía relativa del Estado y del sistema político en general.

Al parecer este último fenómeno se está operando en la sociedad ecuatoriana, en la cual, la vía reaccionaria de desarrollo capitalista en marcha, ha hecho del Estado la estructura legal o jurídico-represiva que lo sustente.

Octubre 1987.